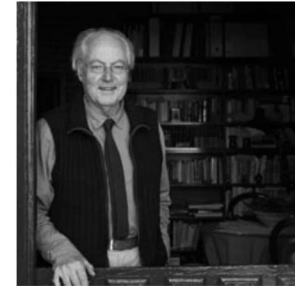


JOSÉ MANUEL NAREDO

Es doctor en Ciencias Económicas y pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Cuenta con una larga experiencia investigadora que combina reflexiones de fondo sobre los fundamentos del pensamiento económico, con análisis concretos que abarcan desde el seguimiento de la coyuntura económica (con especial referencia a los aspectos patrimoniales) hasta el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales y su relación con los recursos naturales y el territorio. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medio Ambiente 2000, con el Premio Internacional GEOCRÍTICA 2008, con el premio Panda de Oro 2011, otorgado por el WWF con motivo de su 50 aniversario y con el Premio de la Fundación Fernando González Bernáldez 2018. Para conocer su trayectoria y sus numerosas publicaciones cabe remitir a su libro *Luces en el laberinto* (La Catarata, 2009) que expone su autobiografía intelectual o a su página Web: elrincondenaredo.org



JAVIER SANZ CAÑADA

Investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC (desde 1992) y coordinador del grupo de investigación Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial. Fue desde 2011 hasta 2019 vicedirector del IEGD/CSIC. Es coordinador científico del European Research Group Local Agro-Food Systems (desde 2008) y secretario científico del Consejo de Redacción de la revista *Estudios Geográficos*, editada por el CSIC (desde 2018). Ha obtenido los siguientes premios de investigación: XX Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias (1992), Premio «José Cascón» de Tesis Doctorales (Colegio de Ingenieros Agrónomos, 1991) y 2º Premio de la Fundación Caja Rural de Jaén (2014). Ha participado en numerosos paneles de expertos. Ha sido coordinador del Desafío Agroecología y Bioeconomía Circular del Libro Blanco de Desafíos Científicos 2030 del CSIC (2021). Actualmente, es responsable de la elaboración del capítulo sobre Logística y Distribución asociativa del Libro Blanco de la Alimentación Sostenible, que está siendo elaborado bajo el patrocinio de la Fundación Carasso y de la Fundación Alternativas. javier.sanz@cchs.csic.es



LO GRANDE Y LO PEQUEÑO LO ECOLÓGICO Y LA LOGÍSTICA

José Manuel Naredo

La exitosa publicación de libros como el de E. F. Schumacher Small is beautiful (1974) (Lo pequeño es hermoso, AKAL, 2001) o el de S. Gorelick, Small is beautiful, and big is subsidised (1998) (Lo pequeño es hermoso y lo grande está subvencionado, La Catarata, 2019) parecen indicar que el movimiento ecologista simpatiza con lo pequeño y recela de lo grande. Y tiene razón en recelar de lo grande, pero si sus realizaciones se centran en lo pequeño y desatienden lo grande tienen el peligro de quedarse en algo testimonial, al dejar que lo grande abastezca el grueso de los consumos. En el extremo opuesto está el enfoque económico convencional que muestra preferencia por lo grande para obtener economías de escala. Pero ¿tiene sentido divorciar lo grande de lo pequeño? ¿No pueden las prácticas ecológicas establecer simbiosis favorables entre lo grande y lo pequeño?

Es un hecho evidente que la agricultura ecológica y sus derivados están más atomizados que las convencionales. Como también lo es que la industria y la comercialización agroalimentaria se llevan la parte del león de los ingresos generados en el proceso agrario. En ambos casos la agricultura está condicionada por los criterios de valoración imperantes, viéndose colonizada por las industrias paraagrícolas y agroalimentarias y por las redes de comercialización. Pero, dada la necesidad de diferenciar sus productos, la agricultura ecológica se encuentra más necesitada que la tradicional de disponer de una logística propia o, por lo menos, amiga, que sea capaz de cumplir con la difícil tarea de conectar en gran escala más directamente medio rural y urbano, potenciando la proximidad, la confianza en la calidad de los productos y asegurando a los agricultores y artesanos ingresos razonables y sin las grandes fugas de lucro hacia las redes intermediarias que hoy se observan.

Políticas para impulsar la transición agroecológica y la digitalización en un mundo poscovid: compra pública responsable y *food hubs* cooperativos

JAVIER SANZ CAÑADA

La transición ecológica de la economía española requiere poner el foco en el sistema agroalimentario por ser es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La FAO estimó para 2017 que, a escala mundial, las emisiones del sector agrario más las relativas a la silvicultura y la roturación de bosques constituían en conjunto el 19,8 % de los GEI¹. Si consideramos adicionalmente las emisiones relacionadas con el transporte y la logística de materias primas agrarias y alimentos, con la industria alimentaria y con la energía gastada en la producción de insumos y maquinaria agrícola y en otros insumos alimentarios, veríamos aumentar muy sensiblemente el porcentaje de emisiones que corresponde al conjunto del sistema agroalimentario. Así, Aguilera *et al.* (2020)² estiman que el sistema agroalimentario en su conjunto es responsable del 27 % de las emisiones de GEI a escala mundial. Además de las emisiones, el sistema agroalimentario imperante produce en su conjunto toda una serie de efectos negativos, tales como la erosión, la contaminación difusa, la pérdida de biodiversidad o la contaminación genética.

1. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/EM/metadata>

2. Aguilera, E., Piñero, P., Infante Amate, J., González de Molina, M, Lassaletta, L., Sanz Cobeña, A. (2020). Emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema agroalimentario y huella de carbono de la alimentación en España. Real Academia de Ingeniería de España.

Por otra parte, la crisis de la covid-19 ha promovido en las preferencias de segmentos crecientes de consumidores determinados valores que pueden incorporar los alimentos, como el respeto al medio ambiente, la producción local o los atributos de salud. Así, el consumo de productos ecológicos se encuentra actualmente en España en una situación de expansión, con unas tasas de crecimiento anual del consumo interior de dos dígitos desde 2013, según datos ofrecidos del Ministerio de Agricultura³. El atributo referente a «consumir productos locales», que ya constituía un valor emergente en las preferencias de los consumidores en momentos previos a la pandemia, continúa ganando presencia en la mente de los consumidores en un mundo poscovid. Lógicamente, la tendencia a valorar de forma creciente los atributos saludables de los alimentos experimenta también un fuerte auge. Además, nuevos segmentos de consumo perciben cada vez con mayor claridad que la salud del planeta y la salud de las personas se encuentran interrelacionadas, como aparece reflejado en el enfoque *One Health* de la Organización Mundial de la Salud.

En consecuencia, tanto la importante contribución de los sistemas agroalimentarios al calentamiento global como las tendencias de cambio en las preferencias de los consumidores constituyen argumentos de peso en favor de implementar políticas de fomento de las actividades de producción agraria, agroindustrial y de distribución de alimentos sostenibles, como es el caso de las experiencias agroecológicas. En la última década ha surgido por todo el territorio español una cantidad apreciable de iniciativas de producción y consumo con una clara orientación hacia la alimentación sostenible que no han traspasado demasiado el ámbito de la población más concienciada o de los entornos activistas. Para que el impacto de la alimentación sostenible en la transición del sistema agroalimentario sea de una magnitud significativa, ha de penetrar en el consumo de capas más amplias de la población.

3. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 2019). *Informe sobre evaluación y caracterización del potencial de contribución de la producción ecológica a la sostenibilidad del medio rural español*. Madrid, MAPA



Así pues, es preciso que, como sociedad, tomemos la responsabilidad de impulsar un salto de escala en la producción y el consumo de alimentos sostenibles. **Las políticas públicas han de abordar este importante desafío.** Las iniciativas agroecológicas y de alimentación sostenible contribuyen con sus métodos de cultivo a convertirse en sumideros de carbono, pero la distribución individualizada y poco profesionalizada en la que incurren la mayoría de

los productores genera no solo altos costes logísticos, sino también una elevada huella de carbono en el transporte, que contrarresta el ahorro realizado en el cultivo.

Por otra parte, la crisis económica inherente a la crisis sanitaria, cuyos efectos están en buena medida por llegar, puede restringir de forma severa la renta disponible que muchos consumidores dedican a la alimentación sostenible. Así, es posible que en un futuro próximo muchos consumidores se vean confrontados a los deseos de acceder a una alimentación más demandante de salud, respeto al medio ambiente y producción local, con las barreras que limitan su capacidad de compra.

Resulta altamente aconsejable impulsar la producción y el consumo alimentario sostenibles; sin embargo, para lograr un salto de escala que remonte la brecha de costes entre la demanda potencial y el consumo real, no cabe otra opción que disminuir los costes de distribución que abaraten el precio al consumo, así como mejorar el acceso de los consumidores a dichos alimentos. Para ello es necesario que los productores

empresan de forma cooperativa la resolución de los problemas de logística y distribución. La logística aborda las tareas de distribución física de los alimentos, tales como el abastecimiento de insumos, el intercambio de productos, el almacenamiento, la preparación de pedidos y el transporte a los puntos de entrega. Para realizar este conjunto de tareas de forma eficiente es preciso optimizar simultáneamente los flujos de materias y de informaciones.

El objetivo de lograr economías de escala y de alcance mediante la logística asociativa contribuye, paralelamente, a optimizar la huella de carbono en el transporte si, además de la realización en común de las tareas logísticas, se llevan a cabo inversiones en vehículos bajos en emisiones. Además, el desarrollo de la entrega a domicilio durante la pandemia



ha contribuido a que, si en momentos anteriores a la crisis de la covid, la resolución colectiva de los problemas de logística por parte de los productores locales constituía el factor clave para minimizar costes de transporte y huella de carbono, en un mundo poscovid lo será más determinante aún. Comenzar a solucionar estos problemas ha de venir de la mano de conjugar la acción de las políticas públicas con las estrategias organizativas de los agentes implicados en la alimentación sostenible.

Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) son el mecanismo con el que el Gobierno y las comunidades autónomas van a gestionar una parte significativa del dinero procedente de los Fondos Europeos para la recuperación de la crisis. Otra política que también puede ser empleada para el fomento de la logística y la distribución de alimentos sostenibles son los fondos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) que gestionan las comunidades autónomas con fondos del segundo pilar de la Política Agraria Común (PAC) de la UE.

A continuación hago referencia a las dos políticas que, en mi opinión, pueden tener un mayor impacto, en un lapso temporal asimilable al corto-medio plazo, en el fomento de la logística y la distribución de alimentos sostenibles: la compra pública alimentaria responsable y el impulso a la creación y a la digitalización de centros logísticos cooperativos integrados por agricultores, transformadores y pequeños distribuidores de alimentos locales y ecológicos (*food hubs*). La ocasión que nos brindan los PERTE para impulsar de forma coordinada ambas políticas no debe dejarse pasar en Extremadura, donde la agricultura y la alimentación tienen un peso elevado en la economía regional y donde la oferta alimentaria es muy variada.

En primer lugar, la **compra pública alimentaria** responsable en los comedores de titularidad pública es seguramente la política que tiene un mayor efecto motor en el fomento de la alimentación sostenible, tanto por sus potencialidades de expansión a nuevos segmentos de la población como por sus efectos de demostración y educativos.

Es la estrategia de mayor relevancia para acelerar el cambio de escala en la demanda de productos locales, frescos, de temporada y ecológicos de un territorio. La ley 12/2018, de 26 de diciembre, que aborda la «contratación pública socialmente responsable de Extremadura», establece el marco normativo para la inclusión de criterios de suministro ecológico y local en los pliegos de contratación de los comedores públicos, tales como centros educativos, sanitarios, penitenciarios, sedes de la administración pública, etc.

No obstante, ha de reconocerse que la incorporación de la alimentación sostenible en los comedores públicos es un proceso bastante complejo que requiere un alto grado de compromiso político, pues la organización logística de un buen número de pequeños productores conlleva posibles disfunciones y riesgos que es obligatorio ajustar en el corto plazo. Es preciso que estos programas se complementen con proyectos de formación de los trabajadores de la restauración colectiva, sobre todo del personal de cocina. Adaptar los menús y la forma de cocinar a la temporalidad estacional o emplear siempre productos frescos no son tareas fáciles de poner en práctica de forma inmediata.

Desde el punto de vista logístico, la compra pública alimentaria requiere un suministro regular y unos volúmenes importantes de productos ecológicos y locales. Si bien la introducción en los menús de dichos productos se realiza paulatinamente, en porcentajes crecientes cada año y variables según los productos, es especialmente importante que no se produzcan desajustes temporales entre la oferta y la demanda. Para evitarlo, la política de compra pública debe armonizarse con la organización local de la oferta y de la distribución física.

En consecuencia, parece conveniente coordinar la política de compra pública con la política de impulso a la creación y a la digitalización de los **food hubs cooperativos**, que concentren la oferta y optimicen los costes, la huella de carbono y la accesibilidad de

los consumidores a los alimentos sostenibles. Esta política ha de tener una finalidad de efecto demostración de sus logros y sus modelos de organización con el fin de replicarlo en otros lugares del territorio. Algunos de los ejemplos más relevantes de *food hubs* cooperativos que existen en España son, entre otros, Sub-bética Ecológica en la provincia de Córdoba, Madrid km0, Vallaecolid, La Ecotira en Valencia, Ekoalde en Pamplona y Sareko en San Sebastián.



En particular, los programas de apoyo a la contratación de personas dinamizadoras de los procesos participativos que conducen a la creación, a la definición de su modelo de gobernanza y a otras tareas inherentes a las primeras fases de constitución de los centros logísticos tienen habitualmente una gran eficacia. Las políticas destinadas al apoyo a las inversiones en capital fijo en los centros logísticos (estanterías, cámaras frigoríficas, carretillas elevadoras, etc.) son especialmente convenientes para el arranque de muchas iniciativas, pues los pequeños productores agroecológicos disponen de escasos fondos para

la inversión. Otra medida relevante es la subvención a la inversión en vehículos bajos en emisiones. En los centros logísticos asociativos las medidas y estrategias de digitalización son esenciales para lograr un umbral alto de eficiencia logística, comercial y ambiental; algunas tareas que pueden ser optimizadas mediante los procesos de digitalización son las

rutas de transporte, el cálculo de la huella de carbono, o bien la interconexión del sistema de transporte con el sistema de gestión de pedidos y de existencias con el sistema contable y con las plataformas de venta *online*.

Los food hubs surgen con el propósito de emprender en común las distintas tareas logísticas, pero tienen también una vocación de comercialización colectiva, lo que suele concretarse, en primer lugar, en plataformas de venta online en común. En el nuevo contexto poscovid la comercialización asociativa necesita adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y poder ofrecer respuestas de comercialización en común mediante plataformas y sistemas de distribución capilar.

Finalmente, queremos insistir en que los PERTE han de constituir una gran oportunidad para impulsar las innovaciones sociales emergentes que contribuyen a la transición ecológica y al fomento de la digitalización. La realidad actual de las iniciativas agroecológicas responde en España y en Extremadura a un colectivo cuya situación es económicamente precaria, pero que tiene un alto grado de predisposición a la innovación y de capacidades humanas y sociales. Para que la alimentación sostenible pueda remontar las barreras al salto de escala es preciso poner en marcha políticas decididas que impulsen simultáneamente y de forma coordinada la compra pública y los *food hubs* asociativos.

* * * *